

LA DESCOMPOSICION DEL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA DEMOCRATICO EN BOLIVIA

RENE
MAYORGA

(CERES, Bolivia)

I. LA DEMOCRATIZACION BOLIVIANA. A MODO DE INTRODUCCION

Considero indispensable plantear previamente el conjunto de hipótesis sobre la problemática de la democratización en la cual emergen las cuestiones que abordaré más adelante, y que definen las bases de mi argumentación¹.

1. Cuando se estableció el régimen democrático en octubre de 1982, el eje central de la democratización estaba constituido por la construcción de una democracia participativa; esto suponía la recuperación y la integración de las tendencias de participación política del movimiento popular en los organismos de conducción del Estado y de la economía, dentro del contexto de la democracia representativa. El proceso democrático se enfrentaba a una cuestión de dimensiones verdaderamente históricas e inéditas en el ámbito latinoamericano: encontrar fórmulas creativas e imaginativas para conciliar las instituciones y las pautas políticas de la democracia representativa, con nuevas formas institucionalizadas de gestión y participación democrática del movimiento popular en los mecanismos de decisión del Estado. Una complementación sustantiva del sistema político representativo era lo que exigían las tendencias históricas del movimiento sindical. Reconocida la necesidad de construir la democracia representativa como base institucional o espacio político imprescindible, la problemática de la democratización revelaba, no obstante, la insuficiente demarcación de las demandas participativas en los límites tradicionales de la democracia representativa, de débil arraigo en la historia política del país.

2. Instaurado el régimen constitucional, el proceso de democratización estuvo sometido a contradicciones antagónicas e insuperables entre las orientaciones ideológicas y las estrategias políticas de la Central Obrera Boliviana (COB)* y la Unión Democrática Popular (UDP). Estos antagonismos decidieron la gran inestabilidad del sistema democrático, la prolongación de la crónica crisis política y la ingobernabilidad de la sociedad. La COB y la UDP respondían a modelos ideológicos y políticos embrionarios y poco sólidos, divergen-

¹ Cf. René Antonio Mayorga, "La crisis del sistema democrático y la COB", en Roberto Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba: CERES, 1985; "La democracia entre la fragmentación y la imposición", en R.A. Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz: CERES, 1987.

* Este ensayo es una versión revisada y ampliada de un artículo que, bajo el título "La Central Obrera Boliviana: Paradoja del sistema democrático", fue presentado al seminario sobre "Sistema político y democracia emergente en Bolivia" organizado por CERES en 1986 bajo el auspicio de CLACSO en el marco del proyecto regional "Sistemas políticos y el fenómeno de las democracias emergentes en Sudamérica", coordinado por Fernando Calderón, que forma parte del Programa PAL (Perspectivas de América Latina), coordinado por Pablo González Casanova.

* Véase al final de este artículo una lista de las siglas utilizadas. (N. del E.)

tes y excluyentes, acerca del sentido de la democracia, de la naturaleza de la reconstrucción del Estado, del rol político de los movimientos sindicales y de las políticas adecuadas para la superación de la grave crisis económica. No hubo un horizonte ideológico y político común y compartido en torno a objetivos y requisitos fundamentales de la democratización en el contexto de una crisis general de la sociedad y el Estado.

3. Estas contradicciones y una específica lógica de conflictos, determinada por pautas de la cultura política tradicional y por principios ideológicos adversos a las reglas de juego de la democracia política, provocaron la derrota política simultáneamente de la COB y la UDP, y, por consiguiente, la frustración de sus respectivas alternativas. De esta manera desapareció la condición básica para una probable consolidación del sistema democrático ligada al desarrollo de perspectivas de participación popular: la constitución de un pacto democrático entre el Estado y la COB.

4. El derrumbe político del movimiento sindical y de las fuerzas de izquierda produjo efectos de vasto alcance: desorientación y desorganización de las organizaciones populares; malogramiento de las experiencias de cogestión y participación campesina; aceleramiento incontrolado de la crisis económica; resurgimiento de las fisuras profundas entre el Estado y el movimiento sindical; desplazamiento radical de la correlación de fuerzas políticas a favor de alternativas conservadoras, que hacen posible la reorganización neoliberal de la sociedad y del Estado a partir de los resultados de las elecciones de julio de 1985 y del ascenso del MNR al gobierno; y, por último, la disolución de las alternativas de izquierda populista y marxista.

5. El fracaso y el retroceso político de la COB es quizás el más grave y el de mayores consecuencias políticas en la historia del movimiento popular, porque ocurre en el contexto de un sistema democrático y no por la vía de la violencia política. Es el resultado de complejos factores que convergen en la profundización del desajuste entre los objetivos estratégicos, las orientaciones ideológicas, los métodos de acción política de la COB y las vías de solución de los intrincados problemas de la sociedad en un marco de frágil democracia representativa, de desintegración de las estructuras tradicionales de acumulación económica que destruye la inserción de la economía boliviana en el mercado mundial, y pone en cuestión su futura viabilidad.

Es muy probable que el fracaso político de la COB sea el resultado de un largo proceso de declinación histórica del movimiento obrero, con el cual se clausura una etapa histórica de la política del país iniciada en la década del 40 y se abre al mismo tiempo una profunda crisis de la identidad colectiva de la COB, que puede ser interpretada como crisis de la matriz de constitución en cuanto sujeto político popular. De ahí que sea admisible inferir la idea de una crisis estructural e histórica de la COB, que es correlativa a la crisis orgánica de la sociedad y del Estado emergentes del proceso revolucionario de 1952.

II. CRISIS DE LA CONFEDERACION OBRERA BOLIVIANA

Jorge Lazarte sostiene la tesis —contrapuesta a lo que afirman recurrentemente los partidos de izquierda²— según la cual la crisis actual del movimiento obrero no sólo estriba en

² Cf. Mir-Masas/BPPP/PCB/CAM, "El pueblo y la nación nos alzamos contra el modelo de la nueva rosca y el imperialismo". *Presencia*, La Paz, 12 de septiembre de 1985; Eje de Convergencia, Documen-

un proceso momentáneo o coyuntural de reflujo y repliegue, sino que responde al cuadro sintomático de un movimiento obrero declinante. Esta crisis afectaría los principios colectivos de la identidad del movimiento obrero: los principios ideológicos y los valores políticos que daban sentido a su lucha, las 'utopías cimentadoras' que estructuraron la identidad positiva de la clase obrera³. Tal interpretación de la situación que vive la COB, y el movimiento popular en su conjunto, representa un adecuado punto de partida para el análisis. En referencia a la misma cuestión, y tomando en cuenta un proceso de disolución de los principios ideológicos y políticos, puede hablarse de la crisis de la matriz constitutiva de la COB como sujeto socio-político. En dicha matriz se escondían, desde sus orígenes, ciertos desajustes y fisuras de tipo ideológico y político que determinaron con mayor o menor incidencia la acción de la COB desde 1952. Ya en las primeras etapas de la revolución nacional se vislumbran estas brechas, que destacó el connotado sociólogo colombiano Antonio García: "Una de las enseñanzas más sorprendentes en el análisis del sindicalismo boliviano y su participación en el proceso de la revolución nacional, es el violento contraste entre las 'ideologías revolucionarias' profesadas por sus cuadros directivos (comunistas, poristas, piristas, lechinistas) y su radical incomprensión tanto del carácter histórico de una revolución nacionalista popular como del rol de los sindicatos en ese proceso de integración (proletariado, campesinado, clases medias) y de galvanización del esfuerzo interno hacia la emancipación y el desarrollo. El proceso de radicalización pareció insistir en los aspectos más dogmáticos y negativos, y de allí que en el momento de asumirse la más grave responsabilidad histórica (la de la participación sindical en el gobierno y en la cogestión de la minería nacionalizada), no se tuviera una idea clara sobre la trascendencia y originalidad de la historia que se estaba viviendo"⁴.

Sobre la base de la argumentación precedente, propongo la hipótesis de que la crisis de identidad de la COB radica en la actualización intensa de dispares dimensiones ideológicas y políticas (radicalismo, nacionalismo revolucionario, tendencias anarco-sindicalistas), que mantuvieron una relación conflictiva de contradicciones y tensiones. En la oposición contra las dictaduras militares y en el mismo proceso de transición hacia la democracia, este fenómeno podía pasar inadvertido. Pero en el proceso político iniciado con el gobierno de la UDP, las rupturas ideológicas y políticas internas de la COB reaparecen con virulencia, y se produce una disgregación creciente de los elementos constitutivos de la identidad de la COB. La crisis política llega entonces a manifestarse en los siguientes términos:

- 1) Ruptura entre la dimensión de clase y la dimensión nacional del movimiento obrero.
- 2) Fractura entre el finalismo y los intereses inmediatos dominados por demandas corporativas y reivindicativas.
- 3) Disociación entre las estrategias generales inspiradas en un objetivo común, pero abstracto y contradictorio en sí (el socialismo), y las políticas concretas adoptadas por la COB.

to político, "Unidad del pueblo para derrotar a la oligarquía y al imperialismo", presentado al XXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en Oruro, mayo de 1986; y Gregorio Lanza, *El poder eterno: Una salida de la crisis*, La Paz: Centro de Estudios Sergio Almaraz, 1986.

³ Jorge Lazarte, "Crepúsculo del movimiento obrero", *Presencia*, La Paz, 29 de mayo de 1986.

⁴ Antonio García, "Los sindicatos en el esquema de la revolución nacional", en A. García, *Estructura social y desarrollo latinoamericanos* (Santiago de Chile: ICIRA, 1969), p. 192.

- 4) No-correspondencia entre la ideología obrerista y la estructura interna de poder en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB, y la ampliación de las bases y los intereses sociales de la COB que tiene lugar con la incorporación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de los sindicatos de empleados públicos.
- 5) Debilitamiento de la COB como sujeto dirigente que articula las complejas dimensiones de lo social y lo político, y alienación entre las cúpulas sindicales y las fragmentadas bases sindicales; es decir, separación entre las orientaciones del liderazgo y los intereses de las bases.
- 6) Retroceso defensivo del movimiento popular y sentimiento generalizado de aislamiento, impotencia y desorientación.

Estos rasgos de la crisis ideológica y política del movimiento popular y la COB podrían quizás resumirse en la desarticulación global de los sentidos de su acción social y política que daban estructura y fisonomía a una fuerte identidad colectiva. A pesar de que el objetivo general del socialismo figura como finalidad histórica de la COB, la ausencia de articulaciones y mediaciones específicas con los objetivos y las prácticas concretas del movimiento popular —dada la generalidad y contradictoriedad del objetivo máximo— tornan discutible la idea de que 'el socialismo' como estrategia homogénea haya sido la utopía central, organizadora de la práctica del movimiento popular y la COB. La forma específica de la identidad colectiva popular parece más bien haber recorrido un movimiento pendular entre una política de oposición y veto derivada del principio y la práctica de autonomía del movimiento popular en relación al Estado y los partidos, y una política de participación en el Estado y la economía bajo las formas de cogestión y cogobierno. En todo caso sería una forma de socialismo, la referida a las tendencias autogestionarias y de participación política autónoma de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la que prefigura un modelo embrionario de reorganización de la sociedad y del Estado. Pero en vista de las heterogéneas orientaciones políticas cubiertas por el paraguas de la tesis socialista de la COB, no puede afirmarse que la identidad colectiva del movimiento popular haya tenido su referente esencial en la utopía del socialismo, sino más bien en las demandas de autogobierno 'y' participación en un Estado democrático. Así, en su abstracta generalidad, la tesis socialista de la COB se ha mantenido en una similar relación de exterioridad con las tendencias y aspiraciones del movimiento popular que caracterizó a la Tesis de Pulacayo. Probablemente las ideologías marxistas del socialismo tal como fueron introducidas y aplicadas por los líderes políticos y sindicales desde la década del 40, no dejaron de ser esquemas dogmáticos incapaces de transformarse en una verdadera voluntad colectiva nacional. Esto atañe a un problema de envergadura continental: el desencuentro entre la América Latina y el marxismo, es decir, la falta real de penetración y fusión mutua del marxismo y las fuerzas sociales, la vida política y el orden cultural⁵.

Si existe una utopía fundamental, latente y activa, en segmentos hasta ahora significativos del movimiento popular en Bolivia —la utopía del autogobierno—, la política de la

⁵ Cf. José Aricó, *Marx y América Latina*, México: Alianza Editorial Mexicana, 1982; Richard Morse, *El espejo de Próspero*, México: Siglo XXI, 1983; Juan Carlos Portantiero, "Socialismo y política en América Latina", en Norbert Lechner (comp.), *¿Qué significa hacer política?*, Lima: DESCO, 1982.

COB, que tiene como trasfondo la experiencia de la insurrección victoriosa de abril de 1952, parece a su vez inspirada en el mito de la repetición de una batalla final⁶.

El rol jugado por la COB durante el gobierno de la UDP revela las ambivalencias de una identidad política —determinada por la oposición y la escisión— que traza límites precisos a una probable articulación entre la democracia y el socialismo: la COB no logra transformarse en un sujeto hegemónico en la sociedad y el Estado; como sujeto contestatario no admite una participación autónoma en un sistema democrático; y tampoco hace posible, lo que constituye su fuerza, que el Estado subordine y coopte al sindicalismo.

Resumiendo los factores que explican la hegemonía parcial e insuficiente de la COB, se pueden citar los siguientes:

1. La heterogénea estructura social y política de la COB que, basada en clases sociales desarticuladas y segmentadas interiormente, dificulta la construcción de un código ideológico articulador de los intereses sociales y políticos y étnico-culturales.
2. La superposición de contradictorias ideologías políticas que no vinculan las dimensiones de clase, nación y transformación social, y que flotan sobre los intereses segmentados de los actores populares.
3. El predominio de una política contestataria y defensiva en relación al Estado, que corresponde a la tradición contra regímenes de dictadura, y simultáneamente una visión paternalista del Estado.
4. La ausencia de elementos en la identidad política de la COB que contribuyan a establecer una relación dinámica con la democracia representativa y reconocer su relevancia para posibles estrategias de transición a un sistema de democracia participativa.

Si aceptamos la hipótesis de la crisis de identidad de la COB y de la declinación del movimiento obrero, tendríamos también que convenir en que estamos ante un proceso de pérdida creciente de la centralidad política del movimiento obrero. A pesar de su hegemonía incompleta, es una realidad indudable y original en el contexto latinoamericano y en relación a las sociedades altamente desarrolladas que el movimiento obrero boliviano ha tenido un poder decisivo de participación, influencia y convocatoria en la política de las últimas décadas. Por eso, aunque el modelo clásico marxista del proletariado como sujeto histórico de la transformación revolucionaria no se comprobó históricamente en las sociedades centrales donde debió verificarse de acuerdo a los pronósticos de la teoría, el caso de la clase obrera minera boliviana demostró un grado de centralidad desconocido en otras latitudes. Sin embargo, este rol protagónico, si bien no hegemónico, es cuestionado por las limitaciones ideológicas y políticas que han minado su capacidad de influir los procesos de decisión del Estado de acuerdo a los objetivos planteados por la COB. La pérdida de centralidad del movimiento obrero remite entonces a los efectos negativos que produce la desproporción entre los objetivos máximos propuestos en el Plan de Emergencia de la COB y los magros resultados obtenidos. ¿Será que la clase obrera no pudo romper su aislamiento ideológico-político —no obstante la convergencia en los obje-

⁶ Refiriéndose al marxismo de Sorel, afirma Kolakowski que "es una invocación catastrofista que organiza la conciencia del proletariado no en programas utópicos, sino en un mito". "El mito —señala— "no es una forma de utopía, sino exactamente su contrario. No es una descripción de una perfecta realidad futura; contiene solamente la perspectiva de una batalla final". (La traducción de este párrafo es mía). Leszek Kolakowski, *Die Hauptströmungen des Marxismus*, t. 2 (München, 1977), p. 185.

tivos de lucha con el movimiento campesino— y que la “clausura corporativista” sigue siendo el reverso de la medalla del radicalismo político? Un analista tan incisivo como Zavaleta destacó esta contradicción real de la centralidad ‘práctica’ de la clase obrera, aspecto que lo indujo a pensar que “sólo una propuesta campesina podría romper esta clausura”⁷. Pero esta conclusión significa reconocer implícitamente los límites internos del poder político del movimiento obrero y del obrerismo de la COB.

Sin embargo, la crisis de identidad de la COB y la declinación del movimiento obrero no es sólo el producto de las prácticas y experiencias políticas en el proceso democrático. Confluye también con la condensación de cambios estructurales de la sociedad y la economía, profundos y complejos, ante los cuales la COB no pudo responder con planteamientos ideológicos y prácticas políticas renovadas. Ni la problemática campesina, ni el cuestionamiento del movimiento regional y de la lucha por la descentralización del Estado, ni la problemática socio-económica y política planteada por la gravitación de la economía informal en una situación de desintegración de la economía formal, fueron asumidas y reelaboradas en el discurso ideológico y en la política de la COB.

Una de las dimensiones de mayor relevancia en estos cambios estructurales es la crisis de la minería, puesto que ataca la estructura y la composición del núcleo de la clase obrera, que es el proletariado minero. Como se sabe, la minería del estaño se ha derrumbado (además de la caída sustancial de los precios de otros minerales importantes en el mercado mundial) y sus posibilidades de recuperación parecen ser remotas⁸. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) es una empresa en completa quiebra. La cogestión mayoritaria de la FSTMB (de abril de 1983 a agosto de 1985) no pudo detener este colapso. La descomposición histórica de la estructura económica lleva, por cierto, no sólo a una disminución sustancial de la importancia estratégica de la minería en la economía nacional —destruyendo así el eje tradicional de acumulación—, sino también a la erosión del poder de influencia política de la clase minera.

La crisis estructural de la minería se evidencia en ciertos datos disponibles. Esta crisis es parte sustancial del debilitamiento general de la economía boliviana, que desde hace diez años vive un proceso de decrecimiento y desde 1981 acusa tasas negativas. Entre 1981 y 1986 el PIB por habitante ha caído en -27.3 por ciento. En este cuadro global, la contribución del sector minero a la generación del PIB descendió de 10.1 por ciento en 1981 a 4.3 por ciento en 1986⁹.

Considerando la participación en las exportaciones, se comprueba que en 1981 la minería contribuyó en 62.3 por ciento (que ya es una reducción en relación al 90.0 por

⁷ René Zavaleta, “Las matas en noviembre”, en R. Zavaleta Mercado (comp.), *Bolivia hoy* (México: Siglo XXI, 1983), p. 24; “Forma clase, forma multitud”, op. cit., p. 222. Véase igualmente Javier Hurtado, *El Katarismo* (La Paz: Hisbol, 1986), pp. 249 y 237, donde se formula una indecisión y contradicción similar. Hurtado sostiene que la posibilidad del ‘socialismo andino’, cuya naturaleza y contradicción similar. Hurtado sostiene que la posibilidad del ‘socialismo andino’, cuya naturaleza y características no se preocupa de analizar o describir, depende de la ‘katarización’ de la COB. Sin embargo, afirma por otra parte que el rumbo ideológico político del MRTK, la organización política del katarismo, depende del programa que le propongan la clase obrera y sus partidos.

⁸ Cf. “Informe sobre la cogestión mayoritaria al XXI Congreso de la FSTMB”, en *Documentos y resoluciones del XXI Congreso de la FSTMB*, La Paz: CEPROMIN, 1986. En este informe se sostiene, en contradicción con la evolución negativa de COMIBOL y los efectos destructivos de la crisis mundial del estaño, que el ritmo acelerado de descomposición de COMIBOL ha sido frenado. Véase p.28. Cf. también el ensayo de Jorge Lazarte, “Cogestión y participación: Ideología y práctica del movimiento obrero”, en René Antonio Mayorga (comp.), *La política como disgregación*, Cochabamba: CERES, 1986 (en prensa).

⁹ Cf. el estudio del Programa de Asesoramiento Minero y Catholic Relief Services, “La crisis del sector minero y sus efectos socio-económicos”, La Paz, 1987.

ciento del valor de las exportaciones en 1970), mientras que en 1986 esta participación bajó a 21.7 por ciento. Los hidrocarburos (el gas) se convirtieron en el principal producto de exportación: su contribución pasó de 34.0 por ciento en 1981 a 66.1 por ciento en 1986¹⁰.

En estas cifras se manifiesta un dramático proceso de descomposición de la minería, en especial del sector estatal, que fue tradicionalmente el área más sólida y fuerte del sector formal de la economía. La minería ya no constituye una fuente generadora de empleo y de ingresos; su importancia estratégica en las actividades productivas desaparece poco a poco. La crisis estructural de la COMIBOL es el producto de un proceso largo, cuyos múltiples factores no cabe analizar aquí. La aplicación de la Nueva Política Económica del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a partir de agosto de 1985, tiene como trasfondo este derrumbamiento de la economía estatal; a la vez, al implantar una reorganización radical de la empresa (descentralización, cierre de la mayoría de las empresas no rentables, reducción de la fuerza laboral, etc.) aceleró la crisis del sindicalismo minero.

La FSTMB está ahora sometida a una histórica dispersión de sus bases sociales, y tiene escasos recursos para impedir los efectos devastadores de esta política sobre la organización sindical y la fuerza política del proletariado minero. La política estatal ha reducido el número de trabajadores de COMIBOL de 27.566 en agosto de 1985 a 9.007 en enero de 1987, mientras que en la minería privada (la llamada minería mediana), la fuerza laboral disminuyó por despidos de 20.000 a 6.000 trabajadores en el mismo lapso¹¹. No es exagerado afirmar que la clase popular tradicionalmente más poderosa en la historia contemporánea del país, está en una coyuntura de disolución. En términos absolutos, la fuerza laboral de la minería, tanto estatal como privada, se ha reducido de 60.000 trabajadores aproximadamente —que constituían en 1979 el 3.9 por ciento de la PEA— a 26.000 aproximadamente, o sea en 55.0 por ciento.

La desintegración de la economía formal coincide con el fortalecimiento creciente y el aumento de la economía informal, particularmente de la economía de la cocaína, que tiene un impacto diversificado sobre la estructura del empleo, del comercio, de los ingresos, etc. De acuerdo a datos aproximados, el PIB generado por la economía habría alcanzado en 1985 a 3.147 millones de dólares, en contraste con el PIB formal, que llegó sólo a 3.055 millones de dólares¹².

En la medida en que la minería pierde la centralidad que detentó durante siglos en la economía boliviana, la clase minera deja de ser el eje económico del país y simultáneamente pierde de manera ostensible su centralidad política. La clase obrera y la FSTMB ya no constituyen el eje central (la "vanguardia") de las luchas sociales y políticas del movimiento popular. Su capacidad de convocatoria, movilización y articulación de las demandas e intereses de las clases populares se ha debilitado cualitativamente. De una política ofensiva por la cogestión obrera de COMIBOL en 1983-1984, ha pasado a partir de 1985 a una lucha puramente reivindicativa y defensiva. Pero aun en éste ámbito, especialmente el referido a la defensa de los puestos de trabajo y al aumento de los salarios, la FSTMB no ha logrado nada desde entonces. Las derrotas políticas sufridas por la COB y por su

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "Relocalizados en el sector minero", *Presencia*, La Paz, 10 de enero de 1987.

¹² Samuel Doria Medina, *La economía informal en Bolivia*, La Paz, 1986; también José Blánés, "La economía de la cocaína en el sector informal urbano" (La Paz, CERES, 1987; mimeo), p. 10 y ss.

sindicato más poderoso, la FSTMB —conectadas al derrumbe de la minería estatal— han acumulado una serie de factores de disgregación y descomposición del movimiento sindical, que se condensa en una crisis histórica de la identidad del movimiento minero y popular.

La problemática fundamental del proceso de democratización en Bolivia se refería a la creación de modelos de participación política del movimiento popular (COB/CSUTCB) en el aparato estatal y la gestión de las empresas del Estado en el ámbito de la consolidación de la democracia representativa. Sin embargo, la naturaleza de las divergentes tendencias ideológicas y políticas, así como las lógicas destructivas de los conflictos entre el gobierno de la UDP, la COB/CSUTCB y los partidos de oposición, determinaron —en una situación de crisis económica fuera de control— la eliminación de las posibilidades de construir las bases institucionales para la participación popular y para una solución pactada de la crisis económica. Ni la cogestión mayoritaria de la FSTMB en la COMIBOL, ni la creación de la Corporación Regional Agraria Campesina (CORACA) para la participación campesina autónoma en la promoción y realización de programas de desarrollo económico en el campo, pudieron contar con perspectivas reales. Al contrario, con el derrumbe del proyecto de gobierno entre la UDP y la COB/CSUTCB, con la desintegración de la UDP y la derrota política del movimiento popular, desaparecen prácticamente las condiciones políticas para la ampliación del sistema político, y se anulan simultáneamente las posibilidades de superar los obstáculos tradicionales entre la COB, el Estado y el sistema de partidos. A partir de la política impresa por el gobierno del MNR, resultado de las elecciones y la decisión del Congreso en julio y agosto de 1985, que consuman la derrota política de la COB y los partidos de izquierda marxista, se establece un sistema político que se ampara en los principios consagrados por la Constitución política del Estado.

El enorme viraje ideológico y político que representa esta nueva etapa en las orientaciones del proceso democrático, cristaliza en una política que tiene como objetivo central erigir al Estado en un muro de contención del ya debilitado poder del movimiento sindical y reforzar las instituciones representativas. El Estado no reconoce entonces a la COB y a la CSUTCB como sujetos políticos, sino como actores sindicales limitados a sus funciones específicas. Se produce una "despoliticación" de la política tradicional: el campo y el juego de la política se restringen a los actores legítimos que sanciona la Constitución Política del Estado y que encarnan la legitimidad del poder estatal y la representatividad del pueblo (el Parlamento y los partidos representados en él). El gobierno pone en marcha un proyecto de dimensiones históricas cuya finalidad es sentar las bases para una recomposición total de la sociedad y del Estado y de las relaciones vigentes desde la revolución de 1952. En el plano político, se trata principalmente de eliminar a la COB como factor de 'poder dual' y poder de veto frente al Estado, restaurando el principio de autoridad de este último como instancia soberana de decisiones políticas. Es obvio que el gobierno del MNR se propone la ruptura radical con el modelo del nacionalismo revolucionario y con la tradición populista del Estado. En el plano económico se intenta, con un altísimo costo social, el control de la hiperinflación a través del congelamiento de salarios, la reducción de empleados públicos y trabajadores de empresas del Estado; y, por otra parte, se intenta una racionalización y reducción de las funciones del Estado, liberalizando al máximo las operaciones económicas de acuerdo a las reglas del mercado y otorgando un espacio significativo a las actividades de la empresa privada (especialmente al sector financiero y comercial).

Ahora estamos confrontados con la paradójica realidad de que la continuidad del sistema democrático y la alternancia del poder, que indican —en medio de una gran con-

fluctualidad de las fuerzas políticas— la relativa consolidación del sistema político, tienen lugar sobre la base de una profunda desarticulación del movimiento obrero y de la crisis política de la COB. Nuevamente se profundiza la brecha entre el Estado y la COB, pero el sistema político y el Estado, fortalecidos con el pacto político suscrito entre el MNR y el principal partido de oposición (Acción Democrática Nacionalista, ADN), tienen ahora un adversario con recursos limitados para frustrar el proyecto de reorganización del Estado y la sociedad que llevan a cabo el MNR y la ADN. Si una COB poderosa como sujeto de oposición y veto, pero con insuficiencias hegemónicas y constructivas, pone al descubierto la fragilidad del sistema democrático y sus propias limitaciones, ¿es una COB debilitada la premisa del fortalecimiento de la democracia?

En este caso, ya no sería válida la premisa de análisis que percibe a la COB como una de las fuerzas políticas de un empate histórico que duró, en efecto, varias décadas. Si es así, una COB despojada de su poder político de veto podría integrarse lentamente a un sistema democrático, ejerciendo funciones de organización sindical y sin tener ya la capacidad de poder o querer suplantar a un gobierno democrático. De esta manera, el supuesto de análisis de la COB como sujeto político, también perdería su validez.

El ocaso del movimiento obrero y la declinación de la COB parecen ser irreversibles. Sin embargo, toda crisis encierra perspectivas ambiguas e inciertas. La solución de una crisis política o de una crisis de identidad de un sujeto social no es producto de fuerzas metasociales sino de proyectos políticos, así como resultante de conflictos entre proyectos¹³.

Una cosa parece ser cierta: la crisis de la COB y del movimiento popular no es meramente coyuntural y epifenoménica, como sostiene generalmente la izquierda partidista. Por esta razón, es difícil vislumbrar una superación de la crisis si la COB insiste en las orientaciones ideológicas y las prácticas políticas que están precisamente en entredicho. La COB se ha recuperado varias veces con extraordinaria rapidez después de períodos de violenta represión y de graves derrotas. El movimiento popular logró, con una capacidad notable de resistencia, una y otra vez reconstituir su fuerza política y su capacidad de acción, pero nunca consiguió trascender los límites inherentes a su autonomía política¹⁴. En esta coyuntura política, la reconstitución de la COB es mucho más complicada que antes, debido a que tanto la crisis estructural de la economía como la política económica del actual gobierno atacan las condiciones estructurales de la reproducción de la clase obrera. Por estas razones, la COB está colocada ante la necesidad de dar prioridad a una política de resistencia contra la disgregación de sus bases sociales, tratando de impedir la agudización de su impotencia política y, simultáneamente, de buscar nuevas formas ideológicas y políticas de reconstrucción del movimiento popular. Es un desafío descomunal. Nunca la COB había tenido que asumir la lucha por la supervivencia de una clase obrera en proceso de disolución, en la medida en que la minería deja de ser el sector estratégico de la economía boliviana. Por eso es explicable la dramática advertencia de Filemón Escobar: "Las direcciones de izquierda y las que se encuentran a la cabeza de la FSTMB y la

¹³ Massimo Cacciari, "Transformación del Estado y proyecto político", en Marramao, Luporini, Cacciari et al., *Teoría marxista de la política*, Cuadernos de Pasado y Presente, 89 (México: Siglo XXI, 1981), p. 236.

¹⁴ Yvon Le Bot afirma, por esto, que la COB es un sísifo sindicalista, puesto que el movimiento obrero ha tenido que rehacer un camino recorrido en múltiples oportunidades. Ha chocado con límites derivados de su dependencia económica y social, y de la evolución del sistema de poder que hacen cada vez más problemática la eventualidad de una solución política basada en el rol crucial de la COB. Véase Yvon Le Bot, "Le mouvement syndical bolivien a la croisée de chemins (1978-1980)", en *Problemes d'Amérique Latine*, 62, 4o. trimestre, Paris, 1981, p. 148.

COB no se dan cuenta de que los propósitos del gobierno se están cumpliendo al cien por ciento. Lo que es peor: hasta ahora no hemos sabido dar una respuesta apropiada a esta disgregación del movimiento obrero... Bolivia se está convirtiendo en un gran mercado de economía informal donde la COB y la FSTMB se están quedando sin la base social a la cual dicen representar"¹⁵.

En resumen, es pertinente sostener que la COB y la FSTMB se hallan en un proceso acelerado de desarticulación, desorganización y desbande. Los principios ideológicos y políticos de su identidad colectiva, que constituyen el marco de referencia de sus demandas y luchas, van disolviéndose progresivamente. Como dice un asesor e intelectual vinculado a la COB, se fracturó la identidad de la FSTMB, basada en la integración de lo corporativo y lo político y en la estrategia de entrelazamiento de las organizaciones clasistas y nacionales. Su conciencia colectiva, arraigada en estos principios constitutivos y en la experiencia acumulada de lucha, ha sido sacudida.

Predomina en los mineros un sentimiento de derrota y la pérdida de la confianza en sí mismos y en sus organizaciones. Gran parte de las bases mineras en los centros productivos tradicionalmente más importantes, desplazaron su lucha a un objetivo alimentado por dirigentes trotskistas y de otras filiaciones radicales: el retiro colectivo y la demanda por subsidios aceptables.

La COB ha perdido la capacidad política de oposición y veto frente a las políticas del Estado y, lo que es peor, ha perdido también como organización sindical su capacidad de defender los intereses económicos y sociales de la masa asalariada. Todo esto ha conducido a la desconfianza de los trabajadores en sus sindicatos y al desvanecimiento de la representatividad de la COB.

Mientras tanto, la izquierda marxista, sobre todo la organización en el llamado *Eje de Convergencia*, esconde la cabeza en un paroxismo de ortodoxia estéril, desconociendo las causas fundamentales de la crisis de sus proyectos, de sus prácticas políticas y, obviamente, de la crisis de la sociedad y del movimiento obrero. Inmunes a los hechos y las experiencias, no aceptan las consecuencias de su política durante el gobierno de la UDP. Han adoptado el fácil recurso de atribuir todos los desaciertos a la 'traición' de la UDP, y todos los aciertos a una política de defensa intransigente de convicciones. El *Eje de Convergencia* sostiene en el documento político presentado al XXI Congreso de la FSTMB en mayo de 1986, que "... la acción pragmática de la socialdemocracia y del reformismo profundizaron la crisis llevándola a límites insostenibles. Así, la capitulación del gobierno de la UDP sentó las bases de la desarticulación, desmovilización y confusión de las masas", y que "fue el entreguismo y la incapacidad de la UDP para aplicar soluciones populares y nacionales a la crisis el principal factor desestabilizador... Mal se puede entonces sindicarse a los trabajadores, y menos aún a los mineros, a las direcciones sindicales de la FSTMB y la COB, de ser causantes de la frustración del proceso democrático"¹⁶. Curiosa actitud de actores políticos que niegan haber formado parte de un escenario de interacción política y se consideran inocentes respecto a los acontecimientos que ellos contribuyeron a gestar. Es indudable que las fuerzas de izquierda no han hecho normalmente política, en el sentido de asumir la responsabilidad por las decisiones y consecuencias políticas de sus actos. Como no reconocen la interacción entre sus principios ideológicos, la acción

¹⁵ Declaraciones de Filemón Escobar en conferencia de prensa del 18 de marzo de 1986; véase "Informe R" (La Paz: CEDOIN, marzo de 1986), p. 7 y ss.

¹⁶ Eje de Convergencia, Documento político, "Unidad del pueblo para derrotar a la oligarquía y el imperialismo" (Oruro, 1986; mimeo), p. 3.

política, los resultados y las experiencias, estos partidos reducen la política a una guerra de convicciones. Pero ¿cómo se puede hacer política sin adoptar una dosis mínima de realismo político, es decir, una posición capaz de tomar en cuenta las relaciones reales de fuerzas, la viabilidad de los proyectos, de aceptar nuevos hechos y revisar expectativas e interpretaciones refutadas por los procesos políticos?

¿Serán las decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la FSTMB, como algunos piensan, el preludio de la renovación de la COB?¹⁷ ¿Es el crepúsculo del "lechinismo" y del radicalismo de izquierda el prólogo de una posible y necesaria recuperación del movimiento popular? El triunfo del documento político de Catavi parece expresar una disposición hacia la necesidad de adoptar un nuevo realismo en la política de la FSTMB que percibe, en primer término, el peligro de desintegración de la clase obrera y, en segundo lugar, otorga una prioridad esencial a una política de defensa de la identidad obrera cuyo objetivo central es precisamente evitar el derrumbe total del aparato productivo de la minería estatal. El documento de Catavi refleja el hecho de que los intereses inmediatos de la clase minera son los que prevalecen. Por el contrario, el documento del *Eje de Convergencia* trasunta las estructuras clásicas del razonamiento de la izquierda: reiteración del finalismo, desplazamiento de los problemas inmediatos por la realización precedente de los objetivos máximos, o sea, un método de condicionamiento *ad infinitum* (ej.: la salvación de COMIBOL depende de la nacionalización de la minería mediana; ésta a su vez depende de la destrucción del actual proyecto oligárquico, lo cual impone la necesidad del desplazamiento de la oligarquía del poder político por la revolución de la clase obrera). Con razón destaca Lazarte que el *Eje de Convergencia* propone una estrategia de solución desde arriba, que implica un razonamiento por diferimiento que posterga las preocupaciones inmediatas de los trabajadores a una solución para las "calendas griegas"¹⁸.

De esta manera, se pone otra vez en evidencia que las contradicciones de los dos documentos políticos reproducen nuevamente dos problemas fundamentales del movimiento sindical y de la izquierda: la separación entre objetivos estratégicos e intereses inmediatos, y la disgregación entre proyectos estatales y demandas corporativas de clase. Si el *Eje de Convergencia* propone la revolución, Filemón Escobar pone énfasis en una concepción que reitera implícitamente una suerte de autogestión obrera en COMIBOL, lo cual a su vez conlleva una serie de supuestos políticos no explicitados. ¿Podrá la estrategia de la autogestión de COMIBOL sentar las bases para la reconstrucción del movimiento popular y la superación de la crisis de la COB en una situación de colapso de la minería y de ofensiva del Estado contra el movimiento obrero? En una interrogante que sólo el futuro comportamiento del movimiento sindical podrá dilucidar, pues está en juego la capacidad para limitar los efectos negativos de los cambios estructurales que afectan su cohesión organizativa e institucional y fundamentalmente su capacidad para continuar siendo un sujeto central de la política boliviana. Ambas dimensiones están íntimamente conectadas, y en el futuro la COB no será políticamente la misma organización si se confirma la declinación del movimiento obrero. La reconstitución de la COB habrá de ocurrir entonces en un marco de recomposición social, ideológica y política. Esto significa que permanecerán vigentes problemas trascendentes para el desarrollo de la democracia.

¹⁷ Cf. Jorge Lazarte, "¿Qué pasó en el XXI Congreso de Mineros?", *Hoy: Análisis*, La Paz, 30 de mayo de 1986; Henry Oporto, "El crepúsculo del lechinismo", en *ibid.*, 27 de junio de 1986; Ricardo Calla, "Liderazgo de Lechin: Parte del pasado", *Presencia*, La Paz, 6 de julio de 1986.

¹⁸ Jorge Lazarte, *op. cit.*, p. 8.

¿Qué perspectivas de consolidación tiene un sistema representativo que es seriamente cuestionado por la COB? ¿Qué posibilidades tiene la democracia en Bolivia sin la participación del movimiento popular? ¿Será posible esta participación en el contexto de una integración de la política de la COB y la democracia representativa?¹⁹

III. LOS MOVIMIENTOS BARRIALES

¿Qué posición ocupan y qué relevancia política tienen los movimientos barriales en esta problemática de la democratización?

Como hemos dicho, en Bolivia el escenario social y político ha estado dominado por un movimiento social histórico tradicional y central, el movimiento sindical organizado en la COB. Este movimiento ha sido intrínsecamente socio-político, integrando una dimensión diacrónica y otra sincrónica en los procesos y conflictos sociales. Es a todas luces evidente que este movimiento social ha respondido a una lógica de conflictos que articula la lucha política por el control del sistema y de los recursos estatales, siendo su acción social-corporativa también política, por su dimensión de oposición al Estado. En ambos niveles, la COB planteó el control del proceso de cambio y de los mecanismos de decisión²⁰.

A fines de la década del 50 surgió un movimiento regional en Santa Cruz que, a partir de la década de los 70, se fortaleció y se expandió desarrollando una gran capacidad de articulación de las demandas regionales y una notable fuerza de presión y negociación en relación al Estado. Lo significativo de las tendencias fundamentales en la actualidad, es que mientras el movimiento regional en Santa Cruz, y particularmente en otras regiones, se encuentra en un proceso de ascenso, el movimiento sindical está en una etapa de franco descenso y declinación, que configura ya una profunda crisis de identidad colectiva.

En este escenario, los movimientos urbanos populares en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se constituyen en nuevos actores sociales (aunque en sus orígenes se remontan —como es el caso de La Paz— a las *Federaciones Vecinales* nacidas en 1916). En 1979 estos movimientos, organizados en *Federaciones Vecinales*, se centralizan en una *Confederación de Federaciones Departamentales de Juntas Vecinales* (JV). Pero en relación a los otros movimientos sociales, ocupan una posición subordinada. Su rol en el proceso de democratización ha sido activo; sin embargo, por múltiples

¹⁹ La estrategia de autogestión de la COMBOL por la FSTMB, propugnada por los dirigentes sindicales que asumieron la conducción del sindicalismo minero en el congreso de Oruro de mayo de 1986, fracasó también porque la crisis interna del movimiento minero —dividido en fracciones políticas antagónicas— afectó seriamente la legitimidad de la dirección sindical. Después de la "marcha por la vida", en septiembre de 1986, toda la dirección de la FSTMB fue impugnada y tuvo que renunciar masivamente. Muchas bases sindicales y los dirigentes del Eje de Convergencia objetaron el acuerdo económico y político que había suscrito la dirección de la FSTMB con el gobierno del MNR, un acuerdo que en varios sentidos favorecía al movimiento minero y trataba de detener la ola de relocalizaciones y de cierre de las empresas mineras del Estado. Se impuso el ala ultraradical de la FSTMB, y la nueva dirección sindical que emergió en el Congreso Extraordinario del Siglo XX en octubre de 1986 planteó la defensa de los beneficios sociales de los retirados como objetivo fundamental de su plataforma de acción. Pasó a segundo plano el objetivo del mantenimiento de las operaciones productivas de la minería estatal. Este fenómeno es quizás el epítome de la crisis de identidad del sindicalismo minero.

²⁰ Es difícil saber cuántas organizaciones aglutina esta Confederación; menos aún se puede conocer la cantidad de sus miembros. Sólo en La Paz existen alrededor de 200 Juntas Vecinales y 4 Federaciones Departamentales, que son las más fuertes del país. De estas Federaciones han nacido los Comités de Amas de Casa, los Clubes Juveniles y Deportivos, así como los Clubes de Madres.

razones no ha dejado de ser secundario. Los *Movimientos Sociales Urbanos* (MSU) han sido apéndices de una dinámica social y política en la cual la COB y el movimiento regional han sido los actores fundamentales.

Inicialmente habría que poner de relieve que los movimientos sociales urbanos en Bolivia no han experimentado —por peculiaridades del proceso social y económico en los últimos 35 años— el crecimiento rápido y hasta explosivo de los peruanos y brasileños. Por sus objetivos y demandas, así como por sus pautas de comportamiento, las prácticas políticas de los MSU en el proceso democrático desde 1987 muestran un carácter discontinuo, puntual, esporádico y limitado. Debido a la dramática profundización de la crisis económica, la participación de los MSU en este proceso ha estado marcada generalmente por objetivos económicos inmediatos, referidos al mejoramiento de los servicios barriales, al aumento de precios y al abastecimiento de bienes de consumo popular. Esto se verifica en la etapa en que se agudizó la crisis económica: las 88 acciones vecinales registradas por la prensa entre octubre de 1982 y diciembre de 1984 se originaron en la inflación, el desabastecimiento, y en el rechazo a la política económica del gobierno de la UDP. De esta manera, pasaron paulatinamente a un nivel secundario los objetivos directamente políticos planteados desde el Primer Congreso de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), realizado en octubre de 1983: el reconocimiento de las *Juntas Vecinales* (JV) como representantes legítimos de los barrios populares e interlocutores válidos de la Alcaldía; la participación directa de las JV en los proyectos y las decisiones municipales, la descentralización del poder municipal en La Paz y la elección del alcalde de El Alto de La Paz por la *Federación de Juntas Vecinales* (FEJUVE).

Es evidente que estos objetivos fueron relativamente alcanzados durante el gobierno de la UDP. Se logró la descentralización de la alcaldía paceña y el alcalde de El Alto reconoció a la FEJUVE y no al gobierno central como única autoridad legítima. La FEJUVE logró también ingresar al *Comité Urbano de Abastecimiento* (CUA), junto a la COB y otras organizaciones. Pero estos avances fueron detenidos, e incluso revertidos, con el derrumbe de la UDP y la transformación de las tendencias políticas y de la correlación de fuerzas a partir de julio de 1985²¹.

La participación política de los MSU no dejó de ser ambivalente: la tendencia predominante ha sido alimentar la participación desde una perspectiva de oposición a los partidos y a la misma política que los movimientos barriales perciben como escenas y actividad de la corrupción, del sectarismo partidista y del clientelismo. Por otra parte, su participación en la lucha por la democratización en las diversas fases, ha comprometido a las FEJUVE en una relación de dependencia clientelista con los aparatos del Estado. Un fenómeno recurrente es el control y la cooptación de los dirigentes de JV por las autoridades de gobierno. La lucha contra el Estado por reivindicaciones sociales y económicas y por la participación autónoma de las FEJUVE en diversas instancias del aparato estatal, se convierte entonces en una incorporación subordinada al sistema de decisiones.

La lógica de acción de los MSU fue tan dual como la del movimiento sindical: por un lado, fue una lógica de presión contra el Estado mediante la aplicación de la acción directa (movilizaciones, bloqueos, etc.); por otro, fue una lógica de negociación con el

²¹ Cf. Fernando Calderón, *La política en las calles*, Cochabamba, CERES, 1983, y *Urbanización y etnicidad: El caso de La Paz*, Cochabamba: CERES, 1984; Roberto Laserna, "La protesta territorial: La acción colectiva regional y urbana en una coyuntura de crisis y democracia", en Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba: CERES, 1985; Roxana Brinati, Noemi Larrazabal, "Los actores sociales en los asentamientos periféricos de La Paz", Cochabamba: CERES, 1986 (mimeo); César Urzagasti, "La Federación de Juntas Vecinales de El Alto: Procesos organizativos e institucionalización de demandas populares", La Paz, 1986 (mimeo).

Estado para obtener participación en los mecanismos estatales, principalmente a nivel municipal.

Si consideramos las orientaciones de los MSU respecto a la cuestión de la democracia, encontramos también actitudes y pautas tan contradictorias y/o ambiguas como las del movimiento sindical. Estas son en muchos aspectos aun más ambiguas, porque van desde el escepticismo y el apoliticismo hasta un compromiso con el proceso democrático, según la estrategia de ampliación y profundización de la democracia propuesta por la COB. Estas actitudes dispares se reflejan igualmente en una suerte de disponibilidad ideológica y política de las masas vecinales, que se manifiesta en las grandes diferencias del comportamiento electoral: de 1978 a 1980 se votó en los barrios populares por la UDP; en 1985, la mayoría de estos votantes se decidió por los partidos de centro-derecha (ADN y MNR).

Las relaciones entre las FEJUVE y la COB están determinadas fundamentalmente por la desconfianza de la dirección sindical ante las organizaciones de los barrios populares. Aunque las FEJUVE han estimulado la participación en las luchas organizadas por la COB, y han adherido en varias coyunturas a las plataformas políticas del movimiento sindical, el rechazo al rol clientelista de los representantes de las FEJUVE en diversos gobiernos militares, y el predominio de la ideología obrerista en los cuadros de la COB han impedido un acercamiento político y organizativo estable y continuo. La COB ha seguido más bien con suspicacia las acciones de las FEJUVE, en las cuales éstas asumieron iniciativas para defender la economía popular.

Si se analiza desde un ángulo global las prácticas políticas del movimiento barrial, es casi inevitable extraer la conclusión de que éste ha sido, y seguramente continuará siendo, un movimiento reactivo y defensivo ante situaciones de crisis económica y social. No se perciben elementos que puedan dar base a la idea de que este actor esté en proceso de constitución como sujeto social de un posible proyecto de transformación histórica. El MSU de La Paz, que es más significativo, no propone ningún proyecto alternativo propio. En la política se adhiere de modo general a la democratización del país (en la expectativa de resolver problemas económico-sociales inmediatos de los barrios populares) o apoya globalmente los objetivos y las orientaciones de la COB. El movimiento barrial es, por supuesto, un actor social en la escena boliviana. Pero es harto difícil y, por cierto, una ostensible exageración, querer ver en él una fuerza potencial de transformación de la sociedad y del Estado²².

Es necesario adoptar perspectivas analíticas sensibles a los procesos y problemas concretos, y menos condescendientes con los deseos políticos.

Los estudios elaborados, aunque no son muchos, son suficientes para demostrar que los MSU en Bolivia son actores restringidos por sus objetivos, demandas, orientaciones y pautas de acción²³. Su naturaleza defensiva no supone una alteración significativa en el campo de los movimientos sociales ni tampoco trasuntan un potencial creciente de transformación de las relaciones de poder. Su capacidad de influencia en las decisiones políticas del Estado ha sido parcial, localizada y puntual.

Tampoco conducen estos MSU a una transformación de la matriz de acción popular encarnada en el movimiento sindical. Siendo nuevos actores, es claro que no pueden desconocer que constituyen un fenómeno ilustrativo de la debilidad de representatividad y

²² Fernando Calderón, "Los movimientos sociales ante la crisis", en F. Calderón (comp.), *Los movimientos sociales ante la crisis* (Buenos Aires: UNU, CLACO, ISTUNAM, 1986), p. 360.

²³ Véase los estudios de Urzagasti, Laserna y Brinati/Larrazabal.

legitimidad del sistema de participación, e incluso de los sindicatos, pero su acción se enfrenta a innumerables barreras que dificultan la superación de las relaciones y pautas clientelistas de las FEJUVE con el aparato estatal. Todo esto no significa ignorar las tendencias existentes, por cierto, aunque subordinadas, hacia la autonomía de las organizaciones barriales y la constitución de gobiernos locales.

El movimiento popular urbano ha sido y sigue siendo fundamentalmente un movimiento sindical. Sus formas de participación y la efectividad de éstas en el proceso democrático, fueron determinadas por las orientaciones de la COB. No obstante ser un actor popular diferenciado —por su propia heterogeneidad social, la desagregación peculiar y la ambigüedad de sus contenidos y pautas de sus acciones—, el movimiento barrial no ofrece atisbos ni indicios que permitan hablar de un sujeto popular, hegemónico y constructivo. Menos aún si se toma en cuenta la crisis general que afecta a los movimientos sociales (a excepción del movimiento regional).

¿Es legítimo en este contexto sostener la idea de que no sólo se está conformando un nuevo actor social, sino que se está constituyendo una nueva identidad colectiva? Mucho se ha abusado de la noción o el concepto de identidad en los estudios dedicados a los MSU. Convencionalmente se entiende por identidad de los MSU la unidad de objetivos e intereses de los sectores populares excluidos, y no se advierte que en esta concepción opera una reducción de un fenómeno mucho más complejo. Como destaca Ruth Cardoso, se ha impuesto una sustitución de la noción de identidad que soslaya el carácter necesariamente relacional de la cuestión. Por lo tanto, se utiliza esta noción sin contemplar el complejo ámbito de múltiples relaciones de los MSU con otros MSU, y sobre todo con el sistema político y el Estado. Y por la influencia predominante de cánones discursivos se ha impuesto metodológicamente una perspectiva que asimila el nivel discursivo de la definición de objetivos e intereses a la identidad y las prácticas de los MSU²⁴. La existencia de orientaciones y pautas de acción contradictorias a las que hace referencia Fernando Calderón, no admite el uso ingenuo del concepto de identidad. En efecto, en la práctica de los movimientos populares urbanos se manifiesta una valoración ética de la democracia versus formas de autoritarismo y verticalismo; una valoración de la diversidad societal versus la tendencia al reduccionismo y a la monopolización de la representatividad; la afirmación y la autonomía de los movimientos sociales versus heteronomía, clientelismo y dependencia; la emergencia de valores de solidaridad, reciprocidad y comunitarismo versus el individualismo, la lógica del mercado y la competencia²⁵.

Si en el caso del Brasil y del Perú algunos autores señalan lo cuestionable que es atribuir a los MSU la capacidad de constitución de nuevas identidades colectivas y de autonomía institucional y política frente al sistema político, lo es entonces aún más en el caso boliviano.

III. CONCLUSION

A modo de resumen, cabe afirmar que en la Bolivia de los últimos años se ha producido una diversificación de los espacios y de los conflictos sociales, y al mismo tiempo un des-

²⁴ Cf. Ruth Cardoso, "Movimientos sociales na América Latina", ponencia presentada al Seminario "Movimientos sociales, democracia y orden político en América Latina y el Área Andina: Cuestiones metodológicas", organizado por CLACSO, Cuenca, Ecuador, noviembre de 1986.

²⁵ Fernando Calderón, op. cit., p. 385.

plazamiento sustancial de los actores sociales y de los ámbitos ejes conflictivos. La tendencia general está determinada por una declinación histórica de los movimientos sociales tradicionales —los sindicatos—, por un proceso sostenido de ascenso del movimiento regional, y por un desarrollo amplio pero difuso de ciertos movimientos étnico-culturales, como el Katarismo. En este panorama de multiplicación de los actores y conflictos sociales, el movimiento minero y popular organizado en la COB ha perdido su lugar central, y es cada vez más incapaz para adecuar sus orientaciones ideológicas, sus estrategias políticas y sus recursos organizativos a una pluralidad de lógicas fundamentales. La articulación fundamental de las luchas sociales, que desde la década del 40 residió en el movimiento minero, ha sido desplazada, sin que se perfile en el horizonte un movimiento que pueda jugar un rol similar.

Pienso que no es desacertada la idea de que Bolivia se enfrenta a una disolución de la centralidad del movimiento sindical y a una fragmentación de las luchas sociales. La excepción consiste en el movimiento regional, que se ha transformado en Santa Cruz en un sujeto articulador de los conflictos entre el Estado y la región, el cual en el futuro tendrá una gravitación cada vez más importante. Sin embargo, sería una evidente exageración sostener que la lógica regional de los conflictos vaya a definir la naturaleza de los conflictos entre la sociedad y el Estado, de manera similar a como lo hizo el movimiento sindical minero. En este contexto, los MSU carecen del potencial para transformarse en un sujeto popular unitario y alterar las tendencias descritas.



SIGLAS UTILIZADAS*

ADN: Acción Democrática Nacionalista

COB: Central Obrera Boliviana

CEN/COB: Comité Ejecutivo Nacional de la COB

COMIBOL: Corporación Minera de Bolivia

CONALJUVE: Confederación Nacional de Juntas Vecinales

CORACA: Corporación Regional Agraria Campesina

CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

CUA: Comité Urbano de Abastecimientos

FEJUVE: Federación de Juntas Vecinales

FSTMB: Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

JV: Juntas Vecinales

MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario

MSU: Movimientos Sociales Urbanos

* Información acerca de las siglas entregada por el Consulado de Bolivia en Santiago. (N del E).